EL LAUDO EN EL DERECHO PRIVADO

SALVADOR R. YANNUZZI RODRÍGUEZ*

SUMARIO

Aclaratoria inicial 1. ¿Qué es el arbitraje? 2. La cláusula compromisoria. 3. El procedimiento de arbitraje. 3.a. El arbitraje institucional. 3.b. El arbitraje independiente. 3c. El Arbitraje de derecho. 3d. El Arbitraje de equidad. • El procedimiento. 4. El laudo. 4.a. Forma y contenido del laudo. 4.b. Clases de laudos. 4.c. Recursos. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía.

* Profesor de las asignaturas Prácticas de III Nivel (UCAB), Teoría General de la Prueba y Pruebas en el Proceso (UCAB - UCV). Jefe del Departamento de Derecho Privado y Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Individuo de Numero de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

ACLARATORIA INICIAL

La intención de este trabajo es referirnos al producto final del arbitraje de Derecho privado, en oposición al arbitraje de Derecho público, como lo es el laudo. En efecto, el arbitraje de Derecho privado corresponde a un negocio jurídico que celebran las partes contratantes referido a un contrato que comprenda derechos disponibles y en razón de ello los contratantes adquieren el compromiso de someter a arbitraje las diferencias que puedan surgir en la interpretación o ejecución del contrato, o las controversias que hayan surgido y que consideren que deben ser resueltas mediante el procedimiento arbitral, para lo cual celebrarán el pacto respectivo; sin embargo, existe un arbitraje internacional, que no es el de Derecho público, diseñado fundamentalmente para que las empresas o sociedades que se desempeñan internacionalmente puedan dirimir sus controversias, con la garantía de la reserva del contenido de lo que está sometido a la consideración del tribunal arbitral, así como de la neutralidad de los árbitros, lo que les otorga mayor confianza que la que se puede desprender de los avatares a los que están sometidos los tribunales de un país en particular y con la certeza de poder contar con una decisión en un plazo razonable.

Cada vez se ha venido incrementando la utilización del mecanismo del arbitraje, como medio alternativo para la resolución de conflictos, para decidir las controversias que surjan entre los contratantes, al comparar las ventajas que otorga en relación con la utilización de los tribunales ordinarios.

Veremos brevemente como se desarrolla el procedimiento de arbitraje, para entrar a considerar el laudo, su forma, contenido, clases y recursos.

1. ¿QUÉ ES EL ARBITRAJE?

El arbitraje es una forma alternativa de resolver las diferencias que puedan existir entre dos o más personas naturales o jurídicas con respecto a derechos disponibles¹. Si bien es un mecanismo de carácter privado, sus decisiones tienen el mismo efecto de la cosa juzgada, por lo que puede ejecutarse; aunque no interviene un juez en el trámite del procedimiento ni en la decisión final, puede solicitarse la ayuda judicial para realizar determinadas actividades². Es un mecanismo que está previsto en la Constitución de la República³, lo que abre las puertas a los interesados para no acudir a la jurisdicción ordinaria (judicial) y solucionar el conflicto mediante el procedimiento arbitral, por estimar que es mucho más flexible que el procedimiento ordinario.

Los interesados pueden, consensualmente, en la cláusula compromisoria, designar al tribunal arbitral, que deben ser terceros independientes a los fines de resolver las diferencias sometidas a su consideración, mediante un laudo. Igualmente, los interesados pueden convenir, por consenso, designar de manera posterior al tribunal arbitral, o dejar su escogencia parcial o total en manos de terceros, a fin de que sustancien el procedimiento y mediante un pronunciamiento solucionen el conflicto.

¹ Se consideran indisponibles aquellos asuntos que no pueden ser objeto de transacción.

² De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Arbitraje Comercial, a los fines de provocar la confesión del contrario por el mecanismo de las posiciones juradas, se puede requerir la ayuda judicial, a los fines de la instrucción de esa prueba. Igualmente, las impugnaciones del laudo son conocidas y decididas por el poder judicial.

³ En efecto, en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hacen referencia a la institución del arbitraje. En ese sentido, el segundo aparte del artículo 253, dispone: “El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio”. Por su parte, el mencionado artículo 258, es del tenor siguiente: “Artículo 258. La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”. En ambas normas se indica que el arbitraje forma parte del sistema de justicia.

Es una prerrogativa que los interesados puedan establecer las regulaciones y condiciones que van a regir para tramitar el procedimiento y dictar el laudo, lo que equivale a establecer las formas que estimen más beneficiosas a sus intereses, porque el arbitraje está soportado en la autonomía de la voluntad de los contratantes, por lo cual están en capacidad de pactar las reglas que consideren convenientes para hacer más expedito el procedimiento, por lo que pueden escoger parte de la normativa vigente o crear disposiciones que se ajusten a sus necesidades⁴, las que no deben ser violatorias del orden público o las buenas costumbres; esta libertad que tienen los interesados, podría conllevar a imponer límites al tribunal arbitral, para proferir el laudo que ponga fin a sus diferencias. En el supuesto de que los interesados nada resolvieren sobre la normativa aplicable, el tribunal arbitral procederá a establecer las normas que se van a aplicar para llevar adelante el procedimiento; sin embargo, es conveniente acotar que los centros de arbitraje tienen sus propios reglamentos en los que se sistematiza la manera de tramitar el procedimiento arbitral, el que vincula a los árbitros y a las partes, si estas no han establecido una regulación que se amolde a sus necesidades. En todo caso, bien sea que la normativa la establezcan los interesados o los árbitros o se apliquen las regulaciones establecidas en los reglamentos de los centros de arbitraje, no puede quebrantarse el principio de igualdad, a fin de no establecer privilegios, preferencias o desigualdades para alguno de los que posteriormente sea parte del procedimiento arbitral, ya que ello puede conducir a la nulidad del laudo que se dicte.

Los interesados tienen la posibilidad de escoger el Derecho aplicable, y a falta de escogencia se aplicará el Derecho venezolano, salvo que exista alguna remisión legal al Derecho extranjero. Puede dictarse el laudo con fundamento a la equidad, si así lo dispusieran los interesados.

Existen distintos tipos de arbitraje, los que podemos clasificarlos por la forma y por la decisión. Por la forma encontramos el arbitraje institucional y el arbitraje independiente. Por el contenido de la decisión, tenemos los arbitrajes de derecho o de equidad.

⁴ Ello también es aplicable al arbitraje independiente. Ver el Parágrafo Segundo del artículo 618 del Código de Procedimiento Civil.

2. LA CLÁUSULA COMPROMISORIA

La cláusula compromisoria es un convenio que realizan dos o más interesados que han celebrado un contrato, para que las diferencias o divergencias que puedan surgir en la interpretación o ejecución de las obligaciones pactadas, sean dirimidas por un tribunal arbitral, como se expresó precedentemente. La Ley de Arbitraje Comercial (en adelante la LAC), en el artículo 5, conceptualiza al “acuerdo de arbitraje” como el *“acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no contractual”*; y aclara, la citada norma, que ese acuerdo de arbitraje puede consistir, bien “en una cláusula incluida en un contrato”, es decir, una cláusula compromisoria o arbitral; o bien “en un acuerdo independiente”, por lo que los interesados pueden otorgar el convenio separadamente. De ello, se concluye que la cláusula compromisoria, es un pacto o convenio distinto de la relación jurídica que las vincula, pero absolutamente conectada con ella.

¿Qué implica otorgar o suscribir una cláusula compromisoria o un acuerdo de arbitraje? La propia LAC nos da la respuesta, y en el citado artículo 5, expresa que *“en virtud del acuerdo de arbitraje, las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria”*. En consecuencia, al suscribir el compromiso, los contratantes deben utilizar este mecanismo alternativo de solución de conflictos.

Es por ello, que se exige una manifestación clara e incuestionable de la voluntad de los contratantes, motivo por el cual en el artículo 6 de la LAC se excluye la posibilidad de incluir dicho acuerdo de arbitraje en los contratos de adhesión, y exige -en este caso- que la manifestación de voluntad de someter el contrato a arbitraje deberá hacerse *“en forma expresa e independiente”*, por lo que debe existir un acto volitivo y no impositivo.

La cláusula compromisoria no está sujeta al cumplimiento de formalidades de especie alguna, simplemente debe constar por escrito,

el cual sería el único requisito formal que se exigiría⁵. Usualmente la cláusula compromisoria está incluida en el contrato que los interesados celebran, y aspiran que, de presentarse alguna divergencia en su exégesis o cumplimiento, esta sea solventada por el tribunal arbitral; sin embargo, esa cláusula es un contrato distinto al que la contiene. Por ello, la cláusula compromisoria puede estipularse después de celebrarse el contrato que eventualmente deba ser objeto de interpretación, de manera independiente o autónoma. De ello se deriva que la cláusula compromisoria, de manera general, es preventiva en el sentido de que si presentare alguna disconformidad se activaría el mecanismo del arbitraje para resolverla; obviamente que para el momento de pactarla, no existe divergencia alguna, ni tampoco está en ciernes algún conflicto, ya que de haberlo -por la teoría de la normalidad- no se otorgaría el contrato, porque nadie desea desmejorarse, pero -evidentemente- la cláusula compromisoria no evitará el problema que pueda surgir entre los contratantes, pero ya se ha determinado la manera como debe resolverse, de presentarse o concretarse el desacuerdo.

Es necesario insistir que este compromiso no puede abarcar aquellos casos en que deban dirimirse derechos no disponibles⁶, solamente es posible utilizar el arbitraje para resolver las divergencias que se presenten con respecto a los derechos que los interesados puedan disponer.

El otorgamiento de la cláusula compromisoria por los interesados, es decir, las partes en el contrato sustancial, que contiene las obligaciones y derechos asumidos, como se señaló precedentemente, comporta una renuncia a que cualquier controversia que pueda surgir derivada de ese contrato, sea conocida por la jurisdicción judicial, por lo que debe resolverse por el mecanismo del arbitraje de acuerdo a lo que hayan decidido los interesados. Por ello, si alguno de los contratantes decide proponer la demanda por ante la jurisdicción ordinaria, el contrario puede, con fundamento a la cláusula compromisoria, promover la cuestión previa por incompetencia del tribunal, debido a lo pactado en dicha cláusula⁷, a fin de que la causa se remita al centro de arbitraje seleccionado

⁵ Ver artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial.

⁶ Esto se refiere a que lo que se pretende sea decidido por medio del arbitraje, afecte el orden público, las buenas costumbres o alguna disposición legal.

⁷ Ver artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

por las partes, o se resuelva mediante un arbitraje independiente, en el caso de no haber seleccionado algún centro de arbitraje.

No obstante lo expuesto, si en las regulaciones del centro de arbitraje seleccionado no existieran previsiones para adelantar cautelas, una de las partes del contrato sustancial, puede gestionar las medidas preventivas que estime necesarias y urgentes por ante la jurisdicción ordinaria, sobre lo cual se pronunció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia 1067, proferida en 3 de noviembre de 2010, en el recurso de revisión interpuesto por Astivenca Astilleros de Venezuela, C.A.⁸, en la que determinó la posibilidad de que se decre-

⁸ En la aludida sentencia 1067, del 3 de noviembre de 2010, la Sala expresó lo siguiente: “Así, en el presente caso, la Sala considera necesario que los trámites o el proceso principal -arbitral- al cual se adheriría la medida decretada, sea iniciado dentro de un número de días determinado, siendo que, de no verificarse tal circunstancia, la medida cautelar decaería automáticamente. En consecuencia, al tratarse el poder cautelar general reconocido en este fallo de verdaderas medidas cautelares, y vista la inexistencia de una norma legal aplicable que señale el término para demandar (ante el Tribunal arbitral), así como los efectos de no hacerlo, esta Sala establece lo siguiente: (i) Podrán solicitarse medidas cautelares antes de constituirse el panel arbitral, ante los Tribunales ordinarios que resulten competentes en base al objeto de la medida que se pretende, sin que tal actuación pueda considerarse incompatible con el acuerdo de arbitraje o como una renuncia a ese acuerdo. En este supuesto, el peticionante de la providencia cautelar debe acompañar el contrato contentivo de la cláusula o el pacto arbitral, y expresar su única pretensión cautelar; así como indicarle que ya ha iniciado o iniciará los actos tendentes a la constitución del tribunal arbitral. (ii) El tribunal competente se determinará por las normas atributivas de competencia aplicables, tomando en consideración que en aquellos casos en los cuales cursen ante órganos del Poder Judicial, acciones relativas a la controversia sometida a arbitraje, el tribunal que conozca de los mismos será el competente para la resolución de las medidas cautelares que le sean solicitadas por alguna de las partes conforme al presente fallo, independientemente de la interposición y trámite de los recursos o consultas establecidas en el ordenamiento jurídico adjetivo aplicable, incluso en los supuestos relativos a la falta o regulación de jurisdicción regulados en los artículos 62 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. (iii) Corresponde a la parte solicitante acreditar los fundamentos para la procedencia de la medida cautelar solicitada; esto es, la satisfacción del peligro en la mora, o la apariencia de buen derecho. (iv) El tribunal sólo podrá decretar medidas cautelares, previa verificación de la no existencia en las normas o reglamentos del respectivo centro de arbitraje al cual se encuentra sometida la controversia, que prevea el nombramiento de árbitros de emergencia para el otorgamiento de medidas cautelares en los términos expuestos infra, salvo que las partes por acuerdo en contrario excluyan la posibilidad de someterse a árbitros ad hoc para el otorgamiento de tales medidas -vgr. Artículo 1, 1.1 del Reglamento de Procedimiento Precautorio Prearbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o el artículo 35.2 del Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje-, así como el cumplimiento de los extremos para la procedencia de las medidas cautelares, lo cual realizará

tara por los tribunales ordinarios medidas cautelares anticipadas, antes de constituirse el tribunal de arbitraje, previa presentación de la cláusula compromisoria, sin que tal actuación pueda considerarse incompatible con el acuerdo de arbitraje o como una renuncia a ese acuerdo, previa verificación de la no existencia en las normas o reglamentos del respectivo centro de arbitraje al cual las partes acordaron que se sometiera la controversia, de alguna previsión acerca del nombramiento de árbitros de emergencia para el otorgamiento de medidas cautelares. Es conveniente acotar, que una vez decretada la medida debe procederse a activar el arbitraje, a menos que el solicitante ya se encuentre en ello, porque de no hacerlo en un lapso de treinta días continuos al decreto de la medida, el tribunal que la estableció debe revocar la cautela, de oficio. Es importante señalar que en otras legislaciones se contempla esa posibilidad, como lo establece la Ley de Enjuiciamiento Civil española⁹.

en forma motivada. (v) Decretada las medidas cautelares, corresponde al solicitante, en un plazo no mayor de treinta (30) días continuos, acreditar que llevó a cabo todas las actuaciones tendentes a poner en marcha el procedimiento arbitral. Requisito que no será necesario, si ello se ha hecho constar en el mismo escrito de solicitud cautelar. (vi) Vencido el lapso al cual hace referencia el anterior punto (v), sin que el solicitante haya cumplido con la carga impuesta, el tribunal de oficio revocará la medida cautelar decretada, y condenará en costas al solicitante. (vii) El solicitante de la medida cautelar que sea revocada conforme al anterior supuesto (vi), es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas. (viii) Hasta que se constituya el tribunal arbitral, la incidencia generada por la petición cautelar seguirá su curso de ley; siendo admisibles todos los recursos que asistan a las partes. Una vez constituido el Tribunal Arbitral, deberán remitírsele inmediatamente las actuaciones para que provea sobre la incidencia cautelar, pudiendo revocarla, ampliarla o modificarla. (ix) Cualquiera que sea el caso, la medida cautelar acordada decaerá automáticamente, si luego de transcurridos noventa (90) días continuos desde su efectiva ejecución, el panel arbitral no se ha constituido. Sobre la base de las consideraciones expuestas, a los fines de ser coherentes con el contenido del presente fallo, esta Sala en orden a tutelar los derechos e intereses de la partes en la controversia que dio origen a la sentencia objeto de revisión, ordena remitir copia de la presente sentencia al Tribunal de Primera Instancia Marítimo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas del contenido de la presente decisión, en orden a que conozca de una eventual solicitud de medida cautelar y se garantice el derecho a una tutela judicial efectiva en los precisos términos del presente fallo. Así se decide”. Tomada de la página web <https://vlexvenezuela.com/vid/astivenca-astilleros-venezuela-c-283251775>, en fecha 13 de junio de 2020.

⁹ En efecto, el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, es del tenor siguiente: “Artículo 730. Momentos para solicitarlas medidas cautelares. 1. Las medidas cautelares se solicitarán, de ordinario, junto con la demanda principal. 2. Podrán también solicitarse medidas cautelares antes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad. En este caso, las medidas que se hubieran acordado quedarán

Es decir, la cláusula compromisoria obliga a los contratantes a dirimir sus conflictos futuros mediante un arbitraje; pero, si se presentare el conflicto, sin que las partes hayan incluido en su contrato la cláusula compromisoria o no la hayan otorgado separadamente o el asunto objeto de la divergencia no fuera contractual, pero los interesados decidieren que la discrepancia sea resuelta mediante un arbitraje, y suscribieran el respectivo convenio, no estaríamos en presencia de una cláusula compromisoria sino de una “*convención de compromiso*”¹⁰, aunque la finalidad sea la misma.

La cláusula compromisoria puede contener alguna estipulación, en el sentido de que previo al inicio del procedimiento de arbitraje, deban los interesados someterse a una conciliación, y en caso de que con ella no pueda lograrse ese cometido, es cuando comenzará el procedimiento de arbitraje. Así mismo, puede establecerse en ella una limitación en cuanto a los asuntos que deban resolverse mediante el arbitraje, referidos al contrato que los vincula, o pueden decidir que todas las divergencias que se presenten con respecto al contrato del que son partes, sean zanjadas por dicho mecanismo.

Como se indicó precedentemente las partes en la cláusula compromisoria pueden designar al árbitro o a los árbitros que deban conocer de la posible controversia, o establecer las modalidades para su selección,

sin efecto si la demanda no se presentare ante el mismo tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los veinte días siguientes a su adopción. El tribunal, de oficio, acordará mediante auto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, condenará al solicitante en las costas y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas. 3. El requisito temporal a que se refiere el apartado anterior no regirá en los casos de formalización judicial del arbitraje o de arbitraje institucional. En ellos, para que la medida cautelar se mantenga, será suficiente con que la parte beneficiada por ésta lleve a cabo todas las actuaciones tendentes a poner en marcha el procedimiento arbitral. 4. Con posterioridad a la presentación de la demanda o pendiente recurso sólo podrá solicitarse la adopción de medidas cautelares cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos. Esta solicitud se sustanciará conforme a lo prevenido en el presente capítulo”. Tomada de la página web http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/11-2000.13t6.html#a730, en fecha 13 de junio de 2020.

¹⁰ Expresión que se usa en el procedimiento civil, por la cual dos o más personas deciden someter a arbitraje un litigio concerniente a derechos de los que tienen ellas libre disposición. Tomado de <http://www.encyclopedia-juridica.com/d/compromiso/compromiso.htm>. Consulta realizada el día 13 de junio de 2020.

lo que es importante ya que usualmente se escogerán por su solvencia moral e intelectual en el aspecto que va a ser sometido a su consideración; así mismo, pueden escoger el lugar en el cual se llevara a cabo el arbitraje así como el centro de arbitraje que prefieran, en el caso de que sea un arbitraje institucional.

3. EL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE

La LAC, en el artículo 2, establece la existencia de dos tipos de arbitraje, a saber: el institucional y el independiente, y señala que el primero es el que se realiza a través de los centros de arbitraje; mientras que el independiente es el regulado por las partes, sin intervención de los centros de arbitraje.

Aunque fundamentalmente la clasificación de los tipos de arbitraje es la indicada en la LAC, a lo que se ha hecho referencia, podemos también clasificarlos por el tipo de decisión, en el sentido si es de derecho o si es de equidad.

Revisemos brevemente cada uno de las diversas clases de arbitraje.

3a. *El Arbitraje institucional*: es aquel en que los interesados seleccionan a un centro o institución de arbitraje, la que está regida por un reglamento, dictado por el mismo ente, y tiene como función administrar y gestionar el procedimiento arbitral, aplicando la normativa contenida en su reglamento y las que hayan determinado las partes.

3b. *El Arbitraje independiente*: es aquel en que los interesados acuerdan, de manera previa a un conflicto o en el curso de un juicio, comprometer sus diferencias, para ser decididas por uno o más árbitros, siempre en número impar, pudiendo resolver la controversia de acuerdo a las disposiciones legales, si son árbitros de Derecho o como les parezca más conveniente al interés de las partes, atendiendo principalmente a la equidad, si son arbitradores. La administración y gestión del procedimiento corresponde a los árbitros, y usualmente el expediente se mantiene en la sede del tribunal de primera instancia.

3c. *El Arbitraje de derecho*: En este tipo de arbitraje, los árbitros decidirán el conflicto con sujeción a un ordenamiento jurídico, el cual está determinado por las partes en el contrato. En su defecto, serán los árbitros quienes lo decidirán en función del contrato, o según los usos y costumbres que en su caso sean aplicables.

3d. *El Arbitraje de equidad*: En esta clase de arbitraje, los árbitros, al igual que los arbitradores, resolverán la controversia conforme a su leal saber y entender, lo que está vinculado a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos sometidos a su consideración.

El procedimiento

El arbitraje, como cualquier procedimiento en Venezuela, se inicia mediante una solicitud escrita, en la que debe especificarse de manera prolija, no solo los antecedentes del asunto que deba someterse a la decisión del tribunal arbitral, en lo que se explique la existencia de la cláusula compromisoria, con la comprobación del documento en que conste, y en consecuencia de que no exista duda de que el asunto debe someterse a arbitraje; es necesario que contenga una identificación completa de ambas partes, lo que incluye el nombre y apellido, así como la cédula de identidad de las personas naturales; la razón social si se tratare de personas jurídicas, con sus datos de registro, la dirección postal, la dirección de correo electrónico y se acostumbra a proporcionar los números de teléfono en que puedan ubicarse; la relación de los hechos, en la que se especificará el objeto sometido al arbitrio del tribunal y los fundamentos de derecho, con el respaldo de la documentación pertinente, la que también debe aportarse; debe especificarse de manera clara lo que se pide y estimarse el valor de la demanda, salvo que del propio petitorio se desprenda de manera diáfana su valor. En fin, debe sustanciarse la solicitud¹¹.

¹¹ De acuerdo al diccionario Panhispánico, la teoría de la sustanciación se fundamenta en “que lo que configura el objeto procesal son los hechos que sirven de fundamento a la pretensión, de suerte que no sería posible un ulterior litigio sobre la base de los mismos hechos”; mientras que teoría de la individualización está referida a “que lo que configura el objeto procesal

Si está referido el asunto a un arbitraje institucional, el solicitante debe adecuarse a lo que dispongan el respectivo reglamento, en cuanto a la forma de la solicitud y el número de ejemplares que deben aportarse, pero indiscutiblemente siempre habrá que consignar un ejemplar que debe anexarse al expediente que conservará el centro de arbitraje en su archivo, a fin de que las partes y árbitros puedan consultarlo.

Si se exigiera algún pago para el inicio del trámite, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias, el solicitante debe enterarlo en el centro de arbitraje respectivo, en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Una vez recibida la solicitud de arbitraje, el centro de pronunciarse sobre su aceptación o rechazo, al verificar si cumple o no con los requerimientos de fondo y forma establecidos en las respectivas regulaciones.

Como quiera que los centros de arbitraje cobren por el servicio de administrar el arbitraje, en los reglamentos se establecen las oportunidades en las que las partes deben proceder a enterar las cantidades que correspondan por dicho servicio, así como los honorarios que corresponden a los integrantes del tribunal arbitral.

Admitida la solicitud de arbitraje, debe notificarse a la parte demandada, remitiendo copia de ella y de los recaudos que la sustentan, de acuerdo a lo convenido por las partes en la cláusula compromisoria, y en su defecto por lo previsto en el respectivo reglamento, en la que se señalará el plazo para que el demandado conteste la demanda, el que debe ser suficiente para garantizarle el derecho a la defensa.

Si bien, en Venezuela, no existe normativa que revele cómo el demandado debe contestar la demanda, a diferencia de la elaboración del libelo, como se indicó precedentemente, la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, había sentado criterio en el sentido de que, para garantizar el derecho de defensa al demandante, la contes-

es el conjunto de hechos jurídicos al que la norma material asocia el surtimiento de los efectos jurídicos previstos en dicha norma e instados en la petición". Tomado de la página web <https://dpej.rae.es/lema/teor%c3%ada-de-la-sustanciaci%c3%b3n>. Consulta efectuada el 15 de junio de 2020. En Venezuela siempre se ha aplicado la teoría de la sustanciación por lo que se debe ser muy prolijo en la especificación de los hechos. El artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, indica de manera pormenorizada como se debe realizar un libelo de la demanda, norma residual que se aplica para la elaboración de cualquier petición.

tación también debía sustanciarse, lo que significa explicar prolijamente en que se sustentan los alegatos del demandado. Necesariamente, la contestación debe presentarse mediante escrito, en el que debe procederse a la plena identificación del demandado, tal y como hemos indicado anteriormente para el demandante, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, agregando su dirección postal y su dirección de correo, también se acostumbra a proporcionar los números telefónicos. Si considera que el centro de arbitraje seleccionado por el demandante no es el escogido por las partes, puede alegarlo, o que se trata de un arbitraje independiente, o la incompetencia del tribunal de arbitraje para dirimir la controversia. Obviamente, que el demandado tiene el derecho a argüir lo que estime conveniente sobre los argumentos y señalamientos formulados por el demandante y aportar los documentos que respalden sus dichos e inclusive puede reconvenir al demandante, cumpliendo con las exigencias de forma que establezca el respectivo reglamento.

Si el demandado objetare la competencia del tribunal de arbitraje para resolver el conflicto, este tiene la facultad de decidir acerca de su propia competencia, lo que puede realizar mediante un laudo parcial o como un punto previo en el laudo definitivo.

Si en la cláusula compromisoria no se hubieren designado los árbitros, se procederá su nombramiento de acuerdo a lo que las partes hayan convenido en aquella, caso contrario, se aplicarán las disposiciones reglamentarias del centro seleccionado.

Una vez designados los árbitros, se procede a su notificación, lo que debe llevarse a cabo en un breve lapso, a fin de que manifiesten su aceptación o no el cargo, y en el primero de los casos suscribir la declaración de independencia e imparcialidad.

Notificados los árbitros y de haber manifestado su conformidad con la designación, y notificadas las partes de dicha circunstancia, se procederá a realizar la audiencia de constitución del tribunal arbitral, se elaborará el acta de constitución del tribunal, la que se agregará al expediente, suscrita por los árbitros y por las partes. Después de constituido el tribunal este prepara, de acuerdo al reglamento del respectivo centro, el acta de misión o el acta de términos de referencia, en la que se

expresará la identificación plena de los árbitros y de las partes y de sus representantes o apoderados, sus direcciones postales y de correo electrónico y los números de teléfonos de cada uno de ellos, a los fines de las notificaciones que deban realizarse; se indicará de manera precisa la naturaleza de la controversia y las pretensiones de las partes, así como la materia litigiosa a resolver. Indicación de las reglas aplicables durante el procedimiento, incluyendo el lapso probatorio. Se dejará constancia, de ser el caso, de si la instrucción de la causa ha sido encomendada a uno de los árbitros, parcial o totalmente, si no lo prohibiere el acuerdo. Se dejará constancia de la sede del arbitraje y del idioma, así como las normas jurídicas aplicables al fondo del litigio y el carácter con el que deben proceder los árbitros.

El acta debe ser suscrita por las partes, con lo cual queda fijada la litis, y las partes no tendrán oportunidad de formular nuevas peticiones sobre el mismo asunto, salvo autorización del tribunal arbitral.

Una vez cumplido con lo anterior, se procede a la instrucción de la causa, lo que debe hacer el tribunal o el árbitro designado para ello. El tribunal arbitral tiene la potestad de solicitar el auxilio de un tribunal de primera instancia para la evacuación de alguna prueba, de conformidad con la LAC. Cumplidas las etapas fijadas, y oídas las posiciones de las partes, el tribunal arbitral procederá al cierre de la instrucción y después de ello debe producir el laudo.

4. EL LAUDO

El laudo es la culminación del procedimiento de arbitraje, que contiene la resolución proferida por el tribunal arbitral designado para dirimir el conflicto planteado. Su eficacia es igual a la de una resolución jurisdiccional, por lo que, a semejanza de una sentencia de mérito, en el laudo, tal como afirma Rengel al conceptualizar la sentencia¹², se va a crear una norma jurídica individual y concreta para regular la conducta de las partes en conflicto, mediante la cual se acoge o rechaza la pretensión que se hace valer en la demanda.

¹² Aristides Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Editorial Arte. Caracas. 1992. Tomo II. Págs. 286-287.

En los arbitrajes institucionales el laudo es solamente conocido por las partes, ya que usualmente de acuerdo con los reglamentos de los centros de arbitraje, los expedientes son reservados para las partes.

Es frecuente encontrar en los reglamentos de los centros de arbitraje que el laudo debe revestir la forma escrita, lo que es consecuencia de la disposición de que el laudo debe ser motivado, para que se pueda conocer los razonamientos tanto de hecho como de derecho en que se fundamentó el tribunal para arribar a la decisión. Aunque, usualmente, la indicación en los reglamentos de los centros de arbitraje es precaria, acerca de los requisitos de forma que deben cumplirse, salvo que debe estar firmado por los árbitros, tener una sucinta motivación, una síntesis breve de los motivos de hecho y de derecho que determinaron la decisión¹³; sin embargo, podemos enumerar algunos requisitos, de forma y contenido, que consideramos debe contener el laudo, los que de seguidas mencionaremos.

4.a. Forma y contenido del laudo

Como requisitos de forma y contenido del laudo, podemos enumerar los siguientes:

- 1) Debe constar por escrito.
- 2) La mención del centro que administra el arbitraje o la indicación de que se trata de un arbitraje independiente, adscrito al tribunal que se debe identificar.

¹³ Ver artículo 38 del Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA). El del Reglamento del centro de arbitraje de la Cámara de Caracas es más amplio y dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 72. Forma y Contenido del Laudo. El Laudo definitivo se dictará por escrito y en el mismo deberá constar la firma de los árbitros en los términos del artículo anterior y deberá contener las siguientes menciones: 1. Nombre, denominación social y domicilio de las partes. 2. Nombre de los árbitros. 3. Indicación del lugar del arbitraje. 4. La indicación de si se trata de arbitraje de derecho o de equidad, y si se trata de arbitraje de derecho, la indicación del derecho aplicable. 5. Motivación de la decisión contenida en el Laudo, que deberá comprender cada uno de los asuntos planteados, a menos que las partes hayan convenido en que no se exprese la motivación del Laudo. 6. Pronunciamiento sobre cuál de las partes deberán correr con los gastos y costas o la proporción en que éstos deberán ser repartidos entre ellas. 7. Lugar y fecha del Laudo. 8. Cualquier otra previsión que el Tribunal Arbitral considere pertinente”.

- 3) La identificación del tribunal arbitral, es decir quienes lo integran, con sus respectivas direcciones físicas y correos electrónicos, e inclusive los números telefónicos en que se puedan ubicar a los integrantes del tribunal.
- 4) La identificación de las partes, con sus números de cédula si se trata de personas naturales, y los datos de registro si se tratare de personas jurídicas. Así mismo, la identificación de quien o quienes la representan, con sus respectivas direcciones de notificación, tanto postales como electrónicas.
- 5) La indicación de que se trata del laudo final¹⁴.
- 6) El lugar o sede del arbitraje.
- 7) El Reglamento aplicable para la sustanciación del arbitraje, o la indicación de las reglas o regulaciones establecidas por las partes.
- 8) Indicación precisa del acuerdo de arbitraje.
- 9) Indicación de la naturaleza del arbitraje, el derecho aplicable y el idioma del procedimiento.
- 10) Los contratos de donde emerge la controversia o conflicto entre las partes.
- 11) Una síntesis clara y precisa de los términos en que quedo planteada la controversia, lo que está referido al acta de misión o el acta contentiva de los términos de referencia. Es decir, lo que aspira cada una de las partes sea decidido por el tribunal de arbitraje, y aquellos puntos en los que están de acuerdo, por lo que no son objeto de controversia.
- 12) Los motivos de hecho y de derecho de la decisión. El laudo, como toda sentencia de mérito, debe ser integral, pero debe estar limitado a lo que las partes hayan planteado en las oportunidades fijadas para ello, y debe considerar los elementos de la pretensión, como lo son los sujetos intervinientes, el objeto y el título, así como las pruebas en que se fundamenta para el establecimiento de los hechos
- 13) Decisión precisa de lo que está sometido a la resolución del tribunal de arbitraje.

¹⁴ Si el laudo fuera parcial, consideramos que debe hacerse la mención respectiva.

- 14) La determinación de la cosa sobre la que recaiga la decisión.
- 15) Expreso pronunciamiento sobre las costas del arbitraje.
- 16) La fecha del laudo.

Igualmente, dentro de las formas que debe cumplir el laudo, tenemos que debe estar firmado por el árbitro o árbitros que conforman el tribunal de arbitraje que lo hayan dictado; en caso de disidencia, parcial o total, de alguno de los árbitros sobre lo decidido, el divergente puede consignar su voto salvado, haciendo constar las razones o motivos de la discrepancia en relación con lo decidido. En caso de que alguno de los árbitros se niegue a suscribir el laudo, este tendrá eficacia si está firmado por la mayoría de los árbitros que conforman el tribunal de arbitraje.

Es de observar que algunos reglamentos de los centros de arbitraje, exigen antes de que el laudo sea depositado, su presentación previa a las partes y representantes del centro, a fin de que puedan hacerse observaciones sobre puntos de forma, e inclusive relacionados con el fondo de lo controvertido. Hay otra modalidad, que es la existencia de un comité que revisa el laudo antes de su publicación a fin de corregir errores de forma u omisiones que se detecten en el laudo presentado por el tribunal de arbitraje. En otros casos, no existe esa revisión y las partes y el centro de arbitraje se enteran del contenido del laudo en la oportunidad de su publicación.

4.b. Clases de laudos

Fundamentalmente se encuentran dos tipos de laudos, que están referidos a los puntos que debe resolver el tribunal de arbitraje. En ese sentido tenemos los siguientes:

Laudo incidental o parcial: es aquel mediante el cual el tribunal arbitral resuelve aspectos sometidos a su consideración, pero que no le ponen fin al procedimiento, y según afirman Osterling y Rebaza¹⁵, si

¹⁵ Felipe Osterling. Alfonso Rebaza. Alcance sobre la expedición de laudos parciales y sus efectos. Tomado de la página web <http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/Alcances%20sobre%20la%20expedicion%20de%20laudos.pdf> Consultado el día 16 de junio de 2020.

bien *“no pondrá fin al litigio, pero podrá resolver aspectos esenciales para una mejor claridad en la resolución de la controversia integral mediante el laudo final”*.

Laudo final o definitivo: es aquel mediante el cual se deciden todos los aspectos sometidos por las partes a la resolución del tribunal arbitral, con lo cual se le pone fin al procedimiento.

Es conveniente acotar que un sector de la doctrina se refiere a los laudos que resuelven sobre la competencia del tribunal de arbitraje como un tipo diferente de laudo, con lo que no estamos de acuerdo, ya que si el tribunal decide pronunciarse incidentalmente sobre su competencia, estaríamos encuadrados dentro de la primera categoría señalada, es decir el laudo incidental o parcial; ahora bien, si el tribunal de arbitraje se pronuncia sobre la competencia en el laudo final o definitivo, se encuadraría en esta categoría, aunque el tribunal de arbitraje se declare incompetente y la resolución del fondo de la controversia debe ser resuelta por otro órgano.

4.c. Recursos

Contra el laudo que se dicte en el procedimiento de arbitraje, existe la posibilidad de proponer un recurso de nulidad, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Arbitraje Comercial, la cual consagra que es el único recurso que procede contra el laudo¹⁶. Lo que se debe precisar, es que este recurso no significa una revisión por una instancia superior de lo decidido por el laudo, simplemente se refiere a la constatación del cumplimiento de las exigencias legales para su eficacia.

Sin entrar a considerar la viabilidad de las causas taxativas indicadas en la Ley de Arbitraje Comercial, tenemos que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada ley, la nulidad del laudo se podrá declarar ante alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

- a) Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad, al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje.

¹⁶ Ver artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial.

- b) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido notificada debidamente de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos.
- c) Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a la LAC.
- d) Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene decisiones que exceden del acuerdo mismo.
- e) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso arbitral.
- f) Cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que, según la ley, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden público.

De interponerse la nulidad del laudo por algunas de las causas indicadas, la decisión que adopte el tribunal superior¹⁷, y en contra de esa decisión cabe interponer el recurso que corresponda, pero solamente se circunscribiría a revisar el pronunciamiento del juzgado superior sobre la nulidad del laudo, pero no sobre lo decidido por el tribunal arbitral en el laudo.

CONCLUSIONES

Como conclusión de lo expuesto tenemos:

- 1) El arbitraje es un mecanismo para que los particulares puedan dirimir sus diferencias mediante la decisión proferida por un tribunal de arbitraje.
- 2) Dicho mecanismo tiene una base constitucional.

¹⁷ El tribunal superior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Arbitraje Comercial, es el competente para conocer del recurso de nulidad.

- 3) El arbitraje puede ser independiente o institucional, dependiendo quien administre el procedimiento.
- 4) Para poder recurrir a dicho mecanismo, es necesario que los interesados lo acuerden mediante un contrato o cláusula compromisoria.
- 5) Pueden someterse a arbitraje asuntos contractuales o extracontractuales, siempre y cuando se trate de derechos disponibles para los interesados.
- 6) El laudo definitivo es equivalente a una sentencia dictada por un tribunal de la jurisdicción ordinaria.
- 7) El tribunal de arbitraje a los fines de evacuar pruebas y para la ejecución de las medidas cautelares pueden pedir asistencia al tribunal de primera instancia competente.
- 8) El único recurso que puede proponerse en contra del laudo es el recurso de nulidad, por las causas previstas en la Ley de Arbitraje Comercial.

BIBLIOGRAFÍA

- Código de Procedimiento Civil. Editorial La Torre. Caracas. 1986.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tomada de la página web http://www.defiendete.org/docs/de_interes/Leyes?CONSTITUCION%20//
- Diccionario Panhispánico. Tomado de la página web <https://dpej.rae.es/lema/teor%c3%ada-de-la-sustanciaci%c3%b3n//>
- Ley de Arbitraje Comercial. Contenida en la publicación del reglamento del CEDCA.
- Rengel Romberg, Aristides Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Editorial Arte. Caracas. 1992. Tomo II.
- Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA). Tomado de la página web <https://cedca.org.ve/wp-content/uploads/2017/01/Reglamento-del-CEDCA-2013.pdf>
- Reglamento del centro de arbitraje de la Cámara de Caracas. Tomado de la página web <https://arbitrajeccc.org/wp-content/uploads/2019/10/RG-CACC-Modificaci%C3%B3n-Anexo-I-Aprobado-JD-9-11-2016.pdf>
- Osterling, Felipe. Rebaza, Alfonso Alcance sobre la expedición de laudos parciales y sus efectos. Tomado de la página web <http://www.osterlin->

gfirm.com/Documentos/articulos/Alcances%20sobre%20la%20expedicion%20de%20laudos.pdf//

Páginas webs

<https://vlexvenezuela.com/vid/astivenca-astilleros-venezuela-c-283251775>,
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/11-2000.13t6.html#a730,
<http://www.encyclopedia-juridica.com/d/compromiso/compromiso.htm>.

PALABRAS CLAVE

Arbitraje.
Cláusula.
Compromisoria.
Laudo.

KEY WORDS

Arbitration.
Clause.
Commitment.
Award.